The Guardian, 29 de abril de 2013

Las Naciones Unidas deben enfrentar la complicidad de Canadá en los abusos a los derechos humanos por parte de las compañías mineras.

El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe revisar la situación de Canadá: no deben pasarse por alto los abusos de sus compañías mineras.

El 26 de abril Canadá debe pasar por la revisión universal periódica (UPR por sus siglas en inglés) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El UPR es un mecanismo internacional establecido en el 2006 para que los gobiernos den cuenta de su situación en materia de derechos humanos. Según Ban Ki-Moon esta revisión tiene el potencial de “promover y proteger los derechos humanos en los rincones más recónditos del planeta”

Cuando Canadá esté frente a las Naciones Unidas para que se examinen sus zonas más oscuras, la comunidad internacional no puede ser ciega ante su complicidad con una industria minera mundial cuyas corporaciones están entre los peores violadores de los derechos humanos y ambientales en el mundo.

Los abusos de las compañías mineras canadienses son una parte sistémica de una política de desarrollo económico que no toma en cuenta los derechos humanos y desdeña el ambiente.

No es casual que Canadá albergue al 75% de las compañías mineras del mundo, la mayoría de las cuales operan fuera de ese país.

El gobierno canadiense aceleró la búsqueda de tratados de inversión en el sur global para servir los intereses de la industria extractiva.

Esos tratados habilitan a las compañías a ignorar políticas ambientales, de salud pública u otras relacionadas con los recursos que afecten las ganancias de la minería.

Al mismo tiempo, Canadá permite a sus corporaciones beneficiarse de un clima de impunidad, que no ofrece recursos legales para comunidades afectadas adversamente, y tampoco les demanda rendir cuenta a cambio de los generosos subsidios públicos que reciben, como en cambio lo hacen la Unión Europea y otras jurisdicciones. Estas condiciones han hecho de Canadá un refugio para la industria minera global.

Las compañías mineras canadienses están operando en el corazón de violentos conflictos en todo el mundo. Aunque la industria a menudo explica que la violencia está localizada y es específica, existe un inconfundible patrón de conflicto social alrededor de los proyectos mineros.

Activistas anti-minería pertenecientes a comunidades a lo largo y a lo ancho del sur global están siendo brutalmente atacados y asesinados por manifestar su oposición a los proyectos mega-mineros. Aún así, comunidades que ya han recibido ese impacto no tuvieron éxito al llevar su caso a las cortes canadienses.

El año pasado, una corte de apelaciones de Quebec rechazó una demanda de ciudadanos de la República Democrática del Congo contra la firma asentada en Montreal, Anvil Mining Limited a la que acusaron de proveer apoyo logístico al ejército

congolés mientras éste llevó adelante una masacre matando a por lo menos 100 personas en el pueblo de Kilwa, cercano a la mina de plata y cobre de la empresa.

Más tarde, tras la apelación, la suprema corte de Canadá confirmó que la justicia canadiense no tiene jurisdicción sobre las acciones de la empresa en el Congo. La organización religiosa Kairos Canadá concluyó que el fallo de la suprema corte “tiene más amplias consecuencias para otras víctimas de los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas canadienses, y de sus posibilidades de llevar sus casos a las cortes de ese país”.

En un mundo crecientemente hambriento de agua, gran parte de la resistencia de las comunidades a las mineras canadienses fue en defensa de los recursos acuíferos. Los proyectos mineros utilizan enormes cantidades de agua y emplean métodos que contaminan recursos hídricos preciosos. Un informe reciente de Earthworks and Mining Watch Canada (hay pdf) descubrió que anualmente son arrojados en lagos, ríos y océanos en todo el mundo 180 millones de toneladas de residuos mineros peligrosos.

En El Salvador, donde más del 60% de la población depende de una sola fuente de agua, esto significa optar entre poder beber agua, y la minería. En el 2009, luego de una inmensa presión pública, el país eligió el agua. Estableció una moratoria para los permisos de la minería metalífera. Las encuestas muestran que una gran mayoría de salvadoreños piden ahora una prohibición permanente de esa actividad.

En Chile, después de una resistencia de la comunidad a un proyecto masivo de plata y oro del gigante minero canadiense Barrick Gold, una corte de apelación ordenó recientemente la suspensión de las operaciones debido a la preocupación de que el proyecto estaba contaminando agua de superficie y de profundidad en el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del mundo.

De todos modos, en un mundo globalizado, estas victorias son precarias. Aún cuando las corporaciones son encontradas violando las leyes locales, o cuando las comunidades rechazan proyectos que destruyen sus recursos, las compañías mineras tienen la posibilidad de usar tratados bilaterales de inversión para seguir adelante, o exigir compensación por ganancias “perdidas”.

Pacific Rim, radicada en Vancouver –que en su sitio de internet se describe a sí misma como “una empresa de exploración ambiental y socialmente responsable cuyos planes de negocios y talento gerencial se enfocan en tener en las Américas depósitos de oro de alta calidad, ambientalmente limpios- está demandando a El Salvador a través de un tribunal del Banco Mundial por 315 millones de dólares por rechazar permisos para una mina de oro en el departamento de Cabanas.

Canadá está persiguiendo un acuerdo comercial con El Salvador que podría fortificar los derechos de las corporaciones mineras haciendo las prohibiciones a la minería virtualmente imposibles.

Una batalla similar se está dando en la vecina Costa Rica, donde la empresa radicada en Calgary Infinito Gold está amenazando con demandar por mil millones de dólares si la corte suprema no da marcha atrás con dos fallos confirmando la prohibición de operaciones mineras a cielo abierto en el país. Y en Chile, la batalla continúa mientras la Barrick Gold evalúa sus opciones legales.

Como se dijo en una reciente nota informativa de la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, (pdf) en un fallo del 2012 por una disputa entre la compañía francesa multinacional de agua SAUR y el gobierno de Argentina, el Centro Internacional para el Establecimiento de Disputas en Inversión advirtió que los derechos humanos no deben minar la protección al inversor.

Es hora de que los organismos internacionales de derechos humanos enfrenten a esta lógica. El ejemplo de la minería canadiense subraya la necesidad urgente del Consejo de Derechos Humanos de defender la primacía de los Derechos Humanos. Si los mecanismos globales de derechos humanos no confrontan la lógica de los derechos de las corporaciones internacionales lideradas por estados como Canadá, arriesgan convertirse en irrelevantes.

- Nota del Editor. El penúltimo párrafo de este artículo fue corregido el 29 de Abril de 2013. Originalmente, el artículo decía que la Unctad declaró en una nota informativa que la aplicación de los derechos humanos no deben minar los derechos de los inversores. Esto ha sido cambiado.

Posted by

[Meera Karunanathan](#)

Wednesday 24 April 2013 07.00 BST guardian.co.uk

Traducción al castellano Silvia Woods, revisada por Alfredo Salibián.